



**Rama Judicial del Poder Público**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla, D.E.I. y P. treinta (30) de septiembre dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-33-33-006- <b>2018-00008</b> -00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

**I. ASUNTO A DECIDIR**

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 13 del Decreto 806 de 2020, en los siguientes términos:

**II. ANTECEDENTES**

**- DEMANDA**

**2.1. PRETENSIONES**

Como pretensiones de demanda, la actora presentó las que a continuación se transcriben:

- 1. Que se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1 de la Resolución N° SSPD 20168200110105.*
- 2. Que se declare la nulidad de la sanción confirmada mediante la Resolución N° SSPD 20178000008685 únicamente en cuanto confirman la sanción impuesta mediante la Resolución SSPD 20168200110105*
- 3. Que a título de restablecimiento del derecho se declare que Electricaribe no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta mediante las resoluciones mencionadas en los dos numerales anteriores.*

**2.2. HECHOS**

Al realizar el estudio del cuerpo de la demanda y sus anexos, como fundamentos fácticos de las pretensiones de demanda, se transcriben los siguientes:

- La señora Esperanza Aznar Cervantes, identificada con el NIC 2342177, presentó recurso de reposición en subsidio apelación el día 29 de julio de 2014, donde su pretensión principal era que la entidad revocara la decisión empresarial N° 2342177-1382199.
- ELECTRICARIBE el día 20 de agosto de 2014, da respuesta a la usuaria donde revoca la decisión administrativa N° 2342177-1382199 y en consecuencia reinicia el proceso a partir del auto de pruebas.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

- Que el día 20 de agosto de 2014, la entidad realiza citación para notificación personal y envía al usuario a través de la guía de envío N° 2761651301141 el día 27 de agosto de 2014. Al no acercarse el usuario a notificarse personalmente la entidad procede a notificar por aviso al usuario mediante guía de envío N° 2764363301141 de fecha 03 de septiembre de 2014.

- Mediante las Resoluciones SSPD 20168200110105 del 2016/06/24 y SSPD 20178000008685 de 2017/03/21 la Superintendencia de Servicios Públicos resolvió sancionar a Electricaribe por incurrir en silencio administrativo positivo.

- La Superintendencia sancionó a Electricaribe S.A. sin realizar una revisión exhaustiva del expediente objeto de la controversia, ya que omitieron verificar que el día en que se envió el aviso por correo, transcurrieron los cinco días contados desde el envío de la citación, fecha que concuerda con el 03 de septiembre de 2014.

### **2.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION.**

Como fundamento de derecho, normas violadas y concepto de su violación, presentó la parte actora los argumentos que a continuación se resumen:

#### **❖ Primer cargo:**

**Infracción de las normas en que deberían fundarse. Violación del principio de legalidad de las faltas y las sanciones contemplado en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. El silencio administrativo positivo no surge por yerros durante el procedimiento de notificación. El artículo 158 de la Ley 142 de 1994 únicamente contempla el silencio administrativo positivo por incumplimiento del plazo para dar respuesta.**

El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en materia administrativa sancionatoria, se observará el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones.

La norma con sustento en la cual se impuso la sanción no fue infringida, se observa que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo únicamente cuando la empresa no da respuesta dentro del término de 15 días.

Se destaca que la norma no contempla la ocurrencia del silencio administrativo por circunstancias distintas al plazo para dar respuesta.

En el caso en comento, se sanciona a ELECTRICARIBE por “falta de respuesta” con sustento en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, pero la “indebida notificación” por aviso extemporáneo no puede equiparse a la “falta de respuesta”. Puesto que el supuesto yerro cometido se dio en la notificación y no en la respuesta del recurso al usuario.

En el presente caso en estudio, ELECTRICARIBE cumplió con su obligación de contestar dentro del plazo legal, tal como lo indica la constancia de envío de la citación para notificación personal que fue insertada en el correo tan sólo días después de haberse radicado la petición inicial.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

### ❖ Segundo cargo

**Infracción del artículo 69 de la Ley 69 de la Ley 1437 de 2011, esta norma no establece el término perentorio de un (1) día para enviar la notificación por aviso.**

En el caso que nos ocupa la SSPD reconoció un silencio administrativo positivo y sancionó a ELECTRICARIBE al considerar que envió el aviso para notificación del usuario fuera del término fijado por el artículo 69 del CPACA para notificar al usuario, sin embargo esa norma no establece ningún término perentorio para el envío del aviso.

Esta norma únicamente señala la obligación de enviar el aviso "al cabo de los 5 días del envío de la citación", pero de ninguna manera establece que tal aviso deba enviarse al día sexto.

Por lo tanto la SSPD infringió las normas en que debería fundarse al sancionar a ELECTRICARIBE por no cumplir una conducta que ni siquiera está prevista en la Ley, como lo sería enviar el aviso en un término perentorio de un (1) día luego de pasados cinco (5) días desde el envío de la citación para notificación personal.

### ❖ Tercer Cargo

**La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios incurrió en Falsa Motivación cuando concluyó que Electricaribe envió el aviso antes del plazo establecido por la norma. El aviso se envió al sexto día de acuerdo al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y de acuerdo a la misma interpretación que ha dado el Consejo de Estado.**

En el presente caso, la empresa Electricaribe fue sancionada porque supuestamente envió el aviso de notificación dentro del término del cual el usuario tenía para notificarse personalmente, sin embargo, los cinco días para que el usuario concurriera a notificarse personalmente contaron desde el mismo día en que se envió la citación para notificación personal, al cabo de los cuales, debía enviarse el aviso.

Lo anterior evidencia una falta a la empresa Electricaribe, ya que fue sancionada en base a una falsa motivación ya que el envío de aviso se hizo dentro del término de Ley y de acuerdo a la interpretación del Consejo de Estado, situación que a todas luces impide el nacimiento del silencio administrativo positivo.

### ❖ Cuarto cargo

**Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.**

En la Resolución Sancionatoria se indicó "Contra la presente resolución sólo procede el recurso de reposición (...)" y en la resolución confirmatoria se indicó "contra la presente resolución no proceden más recursos por encontrarse agotado el procedimiento administrativo"

En el caso que nos ocupa, los actos administrativos demandados son nulos debido a que no concedieron el recurso de apelación:

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

Conforme al artículo 113 de la Ley 142 de 1994 "cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación"

Cuando el Director Territorial Norte impuso la sanción contra ELECTRICARIBE actuaba en virtud de una delegación hecha por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, lo cual se puede evidenciar en el título de los actos administrativos demandados que citan la Resolución 21 de 2005.

El artículo 5º de la Resolución 21 de 2005 establece que el Superintendente Nacional delegó en los Directores Territoriales, la función de sancionar a los prestadores de servicios públicos ubicados dentro de su jurisdicción. Debió concederse el recurso de apelación, debido a que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994 es norma especial vigente para la expedición de actos unilaterales bajo el régimen de servicios públicos domiciliarios.

#### ❖ Quinto cargo

#### **Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.**

En el presente caso las resoluciones son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al no haber hecho mención de la procedencia del recurso de apelación, violó de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el cual establece lo siguiente:

*"Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse."*

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación." Por lo tanto, en vista que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no hizo mención al recurso de apelación, la notificación es inválida, y por lo tanto las resoluciones son nulas.

#### ❖ Sexto cargo:

#### **Infracción de las normas en que debería fundarse. Art. 50 Ley 1437 de 2011. No hay proporcionalidad entre la sanción impuesta y la petición del usuario que eran menores.**

En el caso bajo estudio, la cuantía de la sanción no es proporcional ni razonable a lo solicitado por el usuario, ya que este presentó petición de una cuantía de menos de \$1.000.000 m/l y por un supuesto yerro en el procedimiento de notificación y la Superintendencia de Servicios Públicos sancionó por valor de trece millones setecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos (\$13.789.080 m/l).

Las multas no son razonables ni proporcionales en atención a las cuantías de las peticiones de los usuarios y peor aún implica que Electricaribe E.S.P. deberá atender a pérdida a estos usuarios por varios años mientras logra recuperar el monto de la sanción.

No hay proporcionalidad entre lo solicitado por el usuario y la sanción impuesta por la superintendencia.

## **2.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

### **2.4.1. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

La entidad acusada, no contestó la demanda.

## **2.5. ALEGATOS**

**2.5.1. Electricaribe S.A E.S.P.**, presentó alegatos de conclusión dentro del término legal ratificando los cargos de nulidad propuestos con la demanda.

**2.5.2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**, presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos:

*Que respecto de las pruebas documentales allegadas al expediente, cabe resaltar que las mismas no demuestran de forma alguna que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios directa o indirectamente, haya vulnerado las normas que aduce el demandante.*

*Que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos cuya nulidad se solicita, ya que no demostró probatoriamente, teniendo la carga de la prueba, que dichas resoluciones fueran ilegales, máxime si se solicita que se tomen como pruebas el expediente administrativo conformado en el curso de la investigación adelantada por la demandada, en la cual, se respetó y garantizó el debido proceso de la prestadora y culminó con los actos administrativos hoy atacados por ésta, los cuales se encuentran debidamente motivados, de igual manera es pertinente reafirmar que la demandante no demostró que no había violado las normas y regulación que como prestador estaba sujeto, que dieron origen a la imposición de la sanción por parte de la Superintendencia.*

*De las pruebas arrimadas al legajo se puede descubrir que el usuario presentó recurso el 29/07/2014, teniendo la empresa hasta el 20/08/2014 para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, obrando dentro del expediente que la empresa dio respuesta el 20/08/2014, es decir, dentro del término legal previsto en el artículo 158 de la Ley de servicios públicos domiciliarios.*

*Respecto del proceso de notificación personal que la empresa debió surtir, esta superintendencia encuentra que el citatorio fue puesto en el correo el 27/08/2014, es decir, dentro del término establecido en el artículo 68 del CPACA, teniendo el usuario entre el 28 de agosto al 03 de septiembre de 2014 para comparecer a notificarse personalmente.*

*Del expediente se tiene, que el usuario no compareció a notificarse personalmente de la respuesta, obrando dentro del expediente notificación por aviso con constancia de envío del 03/09/2014, notificación enviada extemporánea por anticipación, pue de acuerdo al artículo 69 del CPACA, el aviso debió enviarse al día sexto, esto es, 04/09/2014.*

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

*Así las cosas, es claro para la entidad que la notificación en el caso particular no cumple los cánones normativos de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, debido a que, por no tener el usuario conocimiento de la decisión de la administración se vulneró su derecho de defensa, como también, el derecho al debido proceso administrativo.*

## **2.6. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

El Ministerio público emitió pronunciamiento dentro presente proceso, el cual se encuentra en el audio de la audiencia.

## **III. TRAMITE PROCESAL**

- La demanda fue presentada el 12 de enero de 2018 y repartida a esta Judicatura en la misma fecha. Mediante auto interlocutorio dictado por este Juzgado el 14 de febrero de 2018 se admitió la demanda.
- Surtidos los trámites de notificación, la demanda no fue contestada.
- Con base en lo señalado en la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, para proferir sentencia anticipada, el Despacho mediante auto de 24 de mayo de 2021, incorporó las pruebas allegadas y fijó el litigio del proceso.
- Ejecutoriado lo anterior, mediante auto de 04 de junio de 2021, se dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión.
- Finalmente, y vencido el referido traslado para alegar, ingresa el proceso a Despacho en estado de dictar sentencia.

## **IV. CONSIDERACIONES.**

### **4.1. Validez de la actuación.**

Revisadas las actuaciones procesales, no observa este Juzgado irregularidades procedimentales que conlleven a declarar la nulidad total o parcial de lo actuado.

### **4.2. Problema jurídico:**

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar si los actos acusados están inmersos en causal de nulidad, de acuerdo a los cargos propuestos en el escrito de demanda, al haberse sancionado a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., por la configuración del silencio administrativo positivo, por no haber notificado por aviso al usuario petionario en debida forma.

Lo anterior pasa por determinar lo siguiente:

Si los trámites de notificación realizados por ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar respuesta al recurso realizado por la usuaria Esperanza Aznar Cervantes, se ajustaron a lo dispuesto en las normas que regulan la materia (artículo 159 de la Ley 142 de 1994 y artículos 67, 68 y 69 del C.P.A.C.A.), bajo la premisa que la falta de notificación de la respuesta ocasiona el silencio administrativo positivo, origen de la sanción a la prestadora de servicios públicos.

### **4.3. Tesis del Juzgado:**

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

En el presente asunto, el Despacho sostendrá la tesis que, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., al momento de notificar el recurso presentado por la usuaria Esperanza Aznar Cervantes, incumplió con las formalidades establecidas en el inciso primero del artículo 69 del C.P.A.C.A para la notificación por aviso, generándose el silencio administrativo positivo, motivo de la sanción, por lo tanto los actos demandados no se encuentran incursos en las causales de nulidad alegadas.

#### 4.4. Marco jurídico y normativo

##### ➤ 4.4.1. Del Silencio Administrativo Positivo en Materia de Servicios Públicos Domiciliarios:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, en la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”, subrogado por el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, consagra el silencio administrativo positivo en los siguientes términos:

*“Artículo 123. Ámbito de aplicación de la figura del silencio administrativo positivo, contenida en el artículo. De conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la superintendencia de servicios públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro del término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicó la demora o que se requirió la práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto. Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición", comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o usuario”.*

De la norma en cita, se colige que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, están obligadas a resolver las peticiones, quejas y recursos que sean presentadas por los usuarios, dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación, so pena de configurarse el silencio administrativo positivo, entendiéndose que lo solicitado ha sido resuelto en forma favorable, el cual deberá reconocer sus efectos dentro de las (72) horas siguientes.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Cuarta en sentencia de 13 de septiembre de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. No. 05001-23-31-000-2011-00984-01 (21514) sostuvo:

*“3.1 El silencio administrativo es un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, a la falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los administrados, se le da un efecto que puede ser negativo o positivo. Ese efecto se conoce como acto ficto o presunto pues, aunque en tales eventos no existe una decisión expresa que contenga la voluntad de la Administración frente al asunto que ha sido sometido a su consideración, la ley le da al silencio de la Administración unos efectos similares a los del acto administrativo expreso. La razón de ser del fenómeno del silencio administrativo es*

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

*la de evitar que los asuntos que la Administración debe resolver queden sin decidir de manera indefinida.*

*3.2 Existen algunas diferencias entre los efectos del acto ficto negativo y del acto ficto positivo. Una de ellas es que mientras que la ocurrencia del silencio negativo no impide que la Administración se pronuncie sobre el asunto, a pesar de haber transcurrido el plazo legal para ello, la configuración del silencio positivo genera un acto presunto que tiene que ser respetado por la Administración.*

*3.3 Ahora bien, para que se configure el fenómeno del silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: i) que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso etc.; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene efectos de silencio positivo (en nuestro ordenamiento, la regla general es el silencio negativo); y iii) que la autoridad que estaba en la obligación de resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, ha dicho la Sala que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, sino notificarse en debida forma.” (Subrayas y negrillas del Despacho)*

Ahora bien, la satisfacción del derecho de petición ejercido ante las empresas de servicios públicos se da con la debida notificación de la respuesta a la solicitud, queja o recurso, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual señala:

*La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.*

*Si dentro del trámite de la apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos estima necesario practicar pruebas o el recurrente las solicita, deberá informar por correo certificado a las partes, con la indicación de la fecha exacta en que vence el término probatorio, que no puede ser superior a treinta (30) días hábiles, prorrogables hasta por otro tanto.*

*PARÁGRAFO. Una vez presentado en forma subsidiaria el recurso de apelación, las partes podrán sustentar y aportar pruebas a la Superintendencia para que sean tenidas en cuenta al momento de resolver en segunda instancia”.*

De lo anterior se desprende que, la notificación de la respuesta a la petición y recursos debe darse según las formas de notificación previstas en el Código Contencioso Administrativo.

Los artículos 66 a 69 del CPACA, señala el procedimiento para la notificación:

**“Artículo 66. Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto.** Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

**Artículo 67. Notificación personal.** Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.



N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

*En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.*

*El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.*

*La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:*

*1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.*

*La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.*

*2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la interposición de recursos.*

**Artículo 68. Citaciones para notificación personal.** *Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.*

*Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.*

**Artículo 69. Notificación por aviso.** *Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

*Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.*

*En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal.”*

- **4.4.2. Sobre la delegación de funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y el recurso de apelación en procesos administrativos ante esta autoridad.**

Atendiendo al hecho que en el expediente de la referencia se acusan los actos administrativos demandados de ser expedidos con violación al debido proceso

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

administrativo, al estimar que la encausada denegó el recurso de apelación interpuesto por el demandante, el Despacho tendrá en cuenta los siguientes preceptos normativos y hará las siguientes precisiones:

La figura de delegación de funciones está consagrada en la Carta Política en el artículo 211<sup>1</sup>, el cual es desarrollada mediante la ley 489 de 1998, que consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y cuando no figuren en el artículo 11 de esa misma Ley.

La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello. La delegación administrativa implica<sup>2</sup>:

- (i) El ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante;
- (ii) Que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y,
- (iii) La existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

#### 4.5. Caso concreto:

Con la demanda de la referencia, Electricaribe, solicita la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:

- a) Resolución SSPD S- 20168200110105 del 24 de junio de 2016 expedida por el Director Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que impuso multa equivalente a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$6.894.540,00). en contra de Electricaribe S.A. E.S.P., por encontrarla culpable de ocurrencia de silencio administrativo positivo por falta de respuesta al recurso interpuesto por la usuaria ESPERANZA AZNAR.
- b) Resolución SSPD-20178000008685 del 21 de marzo de 2017, expedida por la Directora General Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la que, al resolver recurso de reposición, confirmó la Resolución sanción.

Como soporte de la solicitud de nulidad, la parte actora presenta variados cargos de nulidad que el Despacho por técnica judicial entrará a resolver uno a uno de la siguiente manera:

<sup>1</sup> "Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios".

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00.

#### 4.5.1. Análisis crítico de los cargos frente a las pruebas y premisas normativas.

- **Cargos del Primero al tercero.**

Se resolverán los tres (3) primeros cargos de nulidad, por tener conexidad entre ellos, pues se refieren a la ocurrencia del silencio administrativo por no contestar dentro del término las peticiones de los usuarios y los términos establecidos para la notificación de las mismas.

Es así, como manifiesta la entidad demandante en los cargos que se estudia que el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 contempla la ocurrencia del silencio administrativo positivo, únicamente cuando la empresa no da respuesta a la respectiva solicitud dentro de los 15 días siguientes a ésta.

Así mismo indica que se reconoció un silencio administrativo positivo y sancionó a ELECTRICARIBE al considerar que envió el aviso para notificación del usuario fuera del término fijado por el artículo 69 del CPACA para notificar al usuario, sin embargo esa norma no establece ningún término perentorio para el envío del aviso.

Por último alega, que la empresa fue sancionada porque supuestamente envió el aviso de notificación dentro del término del cual el usuario tenía para notificarse personalmente, sin embargo, los cinco días para que el usuario concurriera a notificarse personalmente contaron desde el mismo día en que se envió la citación para notificación personal, al cabo de los cuales, debía enviarse el aviso.

Valorado los cargos en estudio, los mismos no ostentan vocación de prosperar.

La tesis anterior, tiene fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que se desarrollan a continuación:

El artículo 158 de la Ley 142 de 1994, impone a las empresas destinatarias de la norma, como Electricaribe S.A. E.S.P. la obligación de responder los recursos, quejas y peticiones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del recurso, queja o petición.

La misma norma contiene una sanción para los casos en que la empresa no cumpla con la obligación de responder dentro del término aludido, dicha sanción consiste en que frente a la omisión de la empresa se entiende configurado un silencio administrativo positivo a favor del peticionario.

Al respecto, así reza la norma en cita:

*“Artículo 158. Del término para responder el recurso. La empresa responderá los recursos, quejas y peticiones dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación. Pasado ese término, y salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspicio la demora, o que se requirió de la práctica de pruebas, se entenderá que el recurso ha sido resuelto en forma favorable a él*

Ahora bien, dicho artículo si bien establece el término en el cual deben resolverse las quejas y peticiones, no indica la forma en que deben notificarse las respectivas

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

respuestas. Esa forma de notificación se encuentra regulada es en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, el cual preceptúa lo siguiente:

*"Artículo 159. De la notificación de la decisión sobre peticiones y recursos. La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso Administrativo.*

Véase entonces, como la misma Ley que la parte actora utiliza para fundamentar el presente cargo, para efectos de notificación de la respectiva respuesta, remite a la Ley 1437 de 2011. Bien, dicha Ley 1437, en cuanto a las notificaciones reza en sus artículos 68 y 69 lo siguiente:

*"Artículo 68. Citaciones para notificación personal. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.*

*Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días." (Subrayado fuera de texto).*

*"ARTÍCULO 69. NOTIFICACIÓN POR AVISO. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.*

*Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.*

*En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal".*

Conforme lo anterior, teniendo en cuenta la articulación existente entre los artículos 158 y 159 de la Ley 142 de 1994, con los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, de la cual se desprende que la obligación so pena de ocurrencia de silencio administrativo positivo que tiene Electricaribe, no solo se reduce a contestar la reclamación administrativa dentro de los 15 días siguientes a su presentación, sino que va más allá y abarca también el envío de la citación para notificación personal de la respuesta y el aviso en los casos que sea procedente, dentro de los términos que la ley otorga para ello.

Así mismo, del procedimiento de notificación (que regulan las normas antes citadas), se infiere que no le asiste la razón al accionante al manifestar que el término de los cinco (5) días para el envío del aviso debían contabilizarse desde el mismo día del envío de la citación para la notificación personal, toda vez que el artículo 69 del CPACA es claro al establecer que si no fuese posible hacerse la notificación personal, al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso, sin embargo se hace **necesario aclarar que los cinco (5) días a que hace referencia la norma, se contabilizarán una vez fenecido el término que tenía el usuario para proceder a notificarse de manera personal**, el cual comienza a correr al día siguiente en que efectivamente es recibida la citación para la notificación personal, y no desde el mismo día de su envío, como lo señala erróneamente el accionante, lo anterior con la intención de preservar el derecho al debido proceso y contradicción, toda vez que si el aviso es enviado antes de haber culminado el término dispuesto por la Ley al usuario para acercarse a recibir la notificación personal, se estarían vulnerando sus garantías fundamentales dentro del trámite administrativo, por lo cual según las circunstancias aquí expuestas, la entidad demandante debía de conformidad con la normatividad estudiada, enviar la notificación por aviso al finalizar los 5 días dispuestos al usuario para acercarse a la entidad para la notificación personal

Hechos que ratifican la no prosperidad del cargo, de acuerdo al contenido de las pruebas documentales existentes en el expediente, tenemos que, Electricaribe incumplió con su obligación de enviar la notificación por aviso dentro del término legal establecido en la Ley 1474 de 2011, es decir al cabo del quinto (5) día de haber culminado el término del usuario para recibir notificación personal, el cual comienza a correr al día siguiente de haberse recibido efectivamente la correspondiente citación.

A propósito, véase:

- El 29 de julio de 2014, la usuaria Esperanza Aznar interpuso recurso de reposición en subsidio apelación ante Electricaribe S.A. E.S.P.
- A partir de la solicitud presentada, la empresa contaba con quince (15) días hábiles para proferir la respectiva respuesta, los cuales vencían el 20 de agosto de 2014, profiriendo decisión empresarial en término en fecha 20 de agosto de dicha anualidad.
- En fecha 27 de agosto de 2014 se remitió citación de notificación personal, teniendo la usuaria entre el 28 de agosto y el 03 de septiembre de 2017 para comparecer a notificarse personalmente, por lo cual la notificación por aviso debió remitirse de conformidad a la normatividad estudiada desde el día día 04 de septiembre de 2017, y no el 03 de septiembre como efectivamente se encuentra soportado en el plenario, de lo que se concluye que el trámite de notificación se realizó indebidamente, vulnerándose el debido proceso administrativo, toda vez que al enviarse la notificación por aviso antes de haberse culminado el término dispuesto por la Ley para que la usuario accediera a comparecer para recibir la notificación personal, se está recortando el derecho que le asiste a la usuaria de contar con un término amplio de (5) días y se estaría concediendo un término menor, desconociendo los principios que rigen la actuación administrativa, como lo son el debido proceso, en el entendido que ésta, no se rige solamente por la normatividad específica que la regula, sino también en virtud de la integración normativa, se deberán atender principios y normas de carácter Constitucional .

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

**En ese sentido se torna irregular la remisión de la notificación por aviso realizada por ELECTRICARIBE el día 03 de septiembre de 2014 de forma anticipada,** precluyendo el término que la usuaria tenía para notificarse personalmente, activando inmediatamente los efectos procesales de la notificación por aviso, vulnerando de esta manera el derecho al debido proceso del peticionario y desconociendo los parámetros legales de la notificación señalados anteriormente; razones suficientes para no declarar la prosperidad de los cargos de nulidad en estudio.

- **Cuarto cargo**

**Desconocimiento del derecho al debido proceso al no conceder el recurso de apelación contenido en artículo 113 de la Ley 142 de 1994.**

Manifiesta ELECTRICARIBE S.A E.S. P, que se vulneró su derecho al debido proceso, al no haberse manifestado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos la procedencia del recurso de apelación contra los actos administrativos sancionatorios.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho entrará a estudiar los preceptos normativos y hará las siguientes precisiones:

*ARTÍCULO 113. RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES QUE PONEN FIN A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Salvo esta Ley disponga otra cosa, contra las decisiones de los personeros, de los alcaldes, de los gobernadores, de los ministros, del Superintendente de Servicios Públicos, y de las comisiones de regulación que pongan fin a las actuaciones administrativas sólo cabe el recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación o publicación.*

***Pero, cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación.***

*Durante el trámite de los recursos pueden completarse las pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar. (Negrita y subrayada fuera del texto)*

El principal argumento señalado por el demandante dentro del presente cargo se fundamenta en la delegación realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin embargo al analizar el germen de esta figura encontramos que está consagrada en el artículo 211 de nuestra Carta Política la cual es desarrollada mediante la Ley 489 de 1998, que consagra como cláusula general la autorización legal para que las autoridades administrativas deleguen funciones o asuntos específicos, en todos los casos que no estén expresamente prohibidos y que no se encuentren expresamente regulados en el artículo 11 de esa misma Ley.

Por lo cual la delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública, transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello. En ese orden de ideas de acuerdo a lo preceptuado por el Consejo de Estado la delegación administrativa implica<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> CONSEJO DE ESTADO en sentencia con radicado número 11001-03-28-000-2012-00043-00.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
Demandado: SUPERSERVICIOS.

- i. El ejercicio, por parte del delegatario, de las atribuciones propias del funcionario delegante;
- ii. Que la autoridad delegante pueda reasumir en cualquier momento la competencia o funciones delegadas; y,
- iii. La existencia de autorización legal previa al acto de delegación que deriva de la cláusula general establecida en el artículo 2 de la Ley 489 de 1998, salvo que exista prohibición expresa para delegar.

El cargo de nulidad que propone Electricaribe S.A. E.S.P. lo fundamenta en el hecho de que en las resoluciones acusadas no se le otorgó la posibilidad de interponer recurso de apelación a pesar de que el artículo 113 de la Ley 142 de 1994, preceptúa que cuando haya habido delegación de funciones, por funcionarios distintos al Presidente de la República, contra los actos de los delegados cabrá el recurso de apelación y las mencionadas resoluciones acusadas fueron expedidas en virtud de delegación realizada al Director Regional Norte de la Superintendencia por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.

Al respecto, el despacho se permite precisar que los actos administrativos acusados, por ser parte del ordenamiento jurídico colombiano, deben someterse a lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 como cláusula general en torno a la delegación de funciones administrativas.

En esta medida, se hace imperante dar aplicación a la Ley 489 de 1998 al presente caso, máxime cuando el objeto controvertido en este cargo de nulidad es procesal administrativo, referente a la procedencia de recurso de apelación de un acto administrativo expedido en virtud de delegación, escenario en el cual debe atenderse ineludiblemente a la cláusula general que regula la materia, esto es la Ley 489 de 1998.

Sumado a lo anterior, tenemos que, para efectos del ejercicio de las funciones delegadas la Ley 489 de 1998 cobra carácter especial, en tanto que dicha Ley (i) regula el ejercicio de la función administrativa y fija las reglas básicas del funcionamiento de la Administración Pública, pero también, tiene como fuente a (i) los artículos 209 y 211 de la Constitución Política que regulan a la delegación administrativa.

De conformidad a lo señalado, descende nuevamente el Juzgado sobre los asuntos tratados en el presente fallo, encontrando que las decisiones del Director Territorial Norte de la Superintendencia, al no conceder la procedencia del recurso de apelación se encuentran sujetas a derecho, y respetan la regulación normativa aplicable a la materia, en tanto que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, como cláusula general de la delegación administrativa, preceptúa que a los actos expedidos por el delegatario le serán procedentes los mismos recursos procedentes por el delegante, que en este caso es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios cuyos actos administrativos no son susceptibles de ser apelados.

Además de la normatividad señalada anteriormente, se deberá aplicar de igual manera de forma sistemática con el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, que consagra:

*ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:*

- 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.*

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
 Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
 Demandado: SUPERSERVICIOS.

*2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.*

***No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.*** (negrita y subrayado fuera del texto)  
*Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial.*

*3. El de queja, cuando se rechace el de apelación.*

*El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso.*

*De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión.*

*Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente, y decidirá lo que sea del caso*

Concluyéndose con todo lo señalado anteriormente, que en materia de recursos contra los actos administrativos expedidos por los delegatarios la normatividad aplicable es el artículo 12 de la ley 489 de 1998, así las cosas, tal cargo no tienen vocación de prosperidad.

- **Quinto cargo**

**Violación al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.**

En el presente a consideración del demandante las resoluciones son nulas en razón a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no realizó mención de la procedencia del recurso de apelación, violando de esta manera lo estipulado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud del análisis concreto realizado frente al anterior cargo de nulidad, en el cual se estudió la procedencia del recurso de apelación frente a los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el despacho no da lugar al presente cargo propuesto, toda vez que al no existir la posibilidad legal y procesal de interponer recurso de apelación, tampoco surge la obligación para la entidad autora del acto administrativo de conceder o señalar en el mismo acto, recursos que resulten improcedentes, y podría verse expuesto el funcionario a sanciones de tipo disciplinarias y penales, en ese sentido el despacho desecha el presente cargo por no encontrarse soportado legalmente y no encontrar prosperidad en el mismo.

- **Sexto cargo:**

**Infracción de las normas en que debería fundarse. Art. 50 Ley 1437 de 2011. No hay proporcionalidad entre la sanción impuesta y la petición del usuario.**

La tasación de la sanción es una facultad discrecional otorgada por la Ley a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como entidad fiscalizadora de las empresas prestadoras de servicios públicos, la cual se encuentra regulada en el Decreto 281 del 22 de febrero de 2017, mediante el cual se fijaron los criterios y la metodología para graduar las multas a imponer por parte de la SSPD, existiendo una clasificación correspondiente dentro de las cuales encontramos las del Grupo 1, que son las conductas



N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
Demandado: SUPERSERVICIOS.

relativas a la falta de respuesta o respuesta inadecuada a las quejas peticiones y recursos interpuestos por los usuarios de conformidad con el artículo 123 del Decreto 2150 de 1993.

Por lo tanto, dicha facultad sancionatoria, está encaminada a conminar a las empresas para que prevengan la realización de todas aquellas conductas contrarias a la Ley que las regula, dentro de los criterios de graduación de la sanción se tienen en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sin desconocer la capacidad económica de la empresa para no afectar la prestación del servicio.

En ese orden de ideas la SSPD, al momento de imponer la sanción tuvo en cuenta el grado de impacto de la infracción sobre la prestación del servicio público, el número de usuarios afectados, la cuota de participación de mercado, el beneficio económico obtenido producto de la infracción, y el tiempo de duración de la infracción que en el presente caso superó los 3 meses, término dentro del cual la empresa debió acceder al reconocimiento del acto ficto positivo, por lo que al existir una circunstancia de agravación de la sanción como lo es la reincidencia de la conducta por parte de la empresa prestadora del servicio, el despacho llega a la conclusión que la sanción es proporcional, por existir un comportamiento sistemático en la omisión a las normas que regulan la debida respuesta a los usuarios.

## 5. Conclusión.

Una de las características de los actos administrativos acusados es la presunción de legalidad, lo que concordado con el art. 167 del C.G.P., impone a quien pretende la nulidad de dichos actos administrativos, la carga de demostrar la ocurrencia de los cargos de nulidad que proponga en contra de esos actos.

Pues bien, en el presente caso se evidenció que ninguno de los cargos propuestos por Electricaribe S.A. E.S.P. prosperó y se declararon no probados, por lo que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos acusados se encuentra incólume, esto es, no fue desvirtuada.

En este panorama menester es negar todas las pretensiones de la demanda de la referencia, lo cual se hará en la parte resolutive de esta sentencia.

## 6. Condena en Costas

Finalmente, el Juzgado no condenará en costas, debido a que la parte vencida no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a ello, tal como el haber incurrido en temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, en dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el Juzgado Sexto (06) Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## FALLA

**PRIMERO: NEGAR**, conforme a la parte motiva de esta sentencia, todas las pretensiones de la demanda de la referencia.

N y R No. 08-001-33-33-006-2018-00008-00  
Demandante: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.  
Demandado: SUPERSERVICIOS.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO: NOTIFICAR** personalmente esta providencia a la Señora Procuradora delegada del Ministerio Público ante este Juzgado.

**CUARTO:** Ejecutoriada esta providencia, **ARCHÍVESE** el expediente

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LILIA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**

**Juez**

**L.P.M**

**Firmado Por:**

**Lilia Yaneth Alvarez Quiroz**

**Juez Circuito**

**Juzgado Administrativo**

**Contencioso 006 Administrativa**

**Barranquilla - Atlantico**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ff0d559dad99a8d60e2bb24a62fa332433cf0e4f5bd641d21b750f2a2dcdded2**

Documento generado en 30/09/2021 06:08:03 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**